Derecho Político II

La ley 1/1977 para la Reforma Política modifica sustancialmente nuestro ordenamiento jurídico-constitucional, afectando por tanto, parcialmente a los temas XXVIII a XXXVI, correspondientes a las Unidades Didácticas 5.^a y 6.^a de Derecho Político II. Sin perjuicio de que en un futuro Boletín se amplíe el análisis de tal norma creemos conveniente realizar las consideraciones que a continuación pasamos a exponer:

I. La Ley comentada en su «iter legis» cumplió todas las formalidades previstas en las Leyes Fundamentales para su reforma: Informe preceptivo del Consejo Nacional, aprobación por mayoría cualificada de dos tercios de los miembros de las Cortes y subsiguiente ratificación por el cuerpo electoral mediante referéndum (vid. U. D. 5.^a, tema XXVIII, página 112).

II. Desde un punto de vista formal, la Ley de Reforma Política, cuyo texto encontrará el lector en la sección de «Crónica Legislativa», consta de un preámbulo, cinco artículos, tres disposiciones transitorias y una disposición final, teniendo, según ésta última, rango de Ley Fundamental. En cuanto al contenido de la reforma es necesario diferenciar dos ámbitos diversos. En el primero, se modifica la Ley de Principios del Movimiento Nacional, sobre todo en su principio VIII.^o, pues se abandona el carácter orgánico de nuestra representación política siendo sustituido por los principios clásicos de los regímenes democráticos liberales (sufragio universal) inorgánico para la elección del órgano legislativo —artículo 2.^o, 2—, reconocimiento expreso de los derechos fundamentales de la persona que «son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado» —art. 1.^o, 1, párrafo 2.^o—.

La modificación en el ámbito de los Principios Fundamentales, implica la necesidad de interpretar el resto del ordenamiento constitucional desde la nueva perspectiva; por tanto, la modificación expresa que suponen los restantes artículos de la Ley de Reforma no agota el alcance de ésta, pues han de tenerse en cuenta las modificaciones tácitas que derivan de la incorporación de nuevos principios ordenadores.

III. En el segundo ámbito, se modifica la organización de las Cortes (artículos 2.º y 4.º), el procedimiento de reforma (art. 3.º), y se introduce una nueva modalidad de referéndum (artículo 5.º). Veamos cada una de estas modificaciones por separado:

a) En cuanto a la reforma de la organización y funcionamiento de las Cortes, éstas en su nueva estructura, quedan perfiladas del siguiente modo:

— Establecimiento de un sistema bicameral igual con una Cámara Baja (Congreso de los diputados) compuesta por 350 miembros elegidos por sufragio universal directo y secreto de los españoles mayores de edad (art. 2.º, 2.ª y disposición transitoria primera), y una Cámara Alta representativa de las entidades territoriales compuestas por dos tipos de senadores, electivos (207) y designados por el Rey (en número no superior a la quinta parte de los elegidos).

— Ambas Cámaras tienen idénticas atribuciones, y en el artículo 2.º se regula la resolución de posibles conflictos entre ellas por el sistema de Comisión Mixta.

— Cada Cámara elegirá su propio Presidente y establecerá su propio reglamento (art. 2.º, 5).

— Además de los Presidentes de cada una de las Cámaras, se mantiene el Presidente de las Cortes, que será el del Consejo del Reino, y cuyo nombramiento corresponde al Rey. Su atribución fundamental es la de presidir la Comisión Mixta a que antes hemos hecho referencia.

— Se crea una Comisión de Competencia Legislativa común a ambas Cámaras a los efectos de informar preceptivamente la legislación de urgencia. Por su parte, cada Cámara tendrá su propia Comisión de Competencia Legislativa a los efectos de las demás atribuciones previstas en el artículo 12 de la Ley de Cortes (disposición transitoria segunda).

— Se prevé la posibilidad de disolución de las Cortes, hasta ahora desconocida en nuestro derecho en el supuesto a que hace referencia el artículo 5.º.

Por tanto, queda modificado en este sentido el tema XXXII de la 6.º Unidad Didáctica, sobre todo en los epígrafes siguientes «Las Cortes Españolas, su naturaleza, «composición», y, dentro de la pregunta «organización», lo referente al reglamento y a la presidencia de las mismas. Dado que la disposición transitoria 3.ª señala que hasta «que cada Cámara establezca su propio Reglamento, se regirán por el de las actuales Cortes en lo que no esté en contradicción con la presente Ley, sin perjuicio de la facultad de acordar de modo inmediato las modificaciones parciales que resulten necesarias o se estimen convenientes», es útil que el alumno conozca la actual legislación, pues aparte de que en estos momentos sigue vigente, dicho estudio le será provechoso para el momento en que las nuevas Cámaras elaboren sus propios reglamentos.

b) El artículo 3.º modifica el procedimiento de reforma establecido en el artículo 10 de la Ley de Sucesión, atemperando, como es lógico, dichos procedimientos a la nueva configuración bicameral de las Cortes. El nuevo proce-

dimiento de reforma difiere del hasta ahora vigente en dos aspectos; en primer lugar, la regulación es más detallada, haciendo referencia a la iniciativa que corresponderá al Gobierno y al Congreso de los Diputados, quedando, por tanto, excluida de ella el Senado. En segundo lugar se disminuye la rigidez de nuestra Constitución desde el momento en que se pasa de exigir para la reforma de las Leyes Fundamentales de una mayoría cualificada de dos tercios de los componentes de las Cortes a exigir la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y del Senado. En síntesis el procedimiento es el siguiente: 1) Iniciativa (Gobierno o Congreso de los diputados). 2) Deliberación y aprobación en el Congreso de los diputados. 3) Deliberación en el Senado sobre el texto aprobado en el Congreso de los Diputados. 4) En el supuesto de que el Senado no acepte en su integridad el texto aprobado por el Congreso, las discrepancias se someterán a la Comisión Mixta antes mencionada, y si ésta no llega a un acuerdo o su propuesta no fuese aprobada por las dos Cámaras, se decidirá en sesión conjunta de ambas por mayoría absoluta. 5) En el supuesto de ser aprobada la reforma por las Cortes, el Rey deberá someter el texto a referéndum de la nación antes de proceder a su sanción.

Lo que hasta aquí dicho constituye el procedimiento de reforma, que pudiéramos llamar ordinario, pero existe otro procedimiento de reformar nuestras Leyes Fundamentales, pues, según el artículo 5.º, el Rey puede someter a referéndum de la nación, de modo directo, materias de carácter constitucional. Si el texto propuesto es aprobado y las Cortes no lo aprueban en los mismos términos, quedarán automáticamente disueltas. Así pues, en este segundo sistema se invierte el procedimiento, comenzando por el referéndum y sometiéndose a continuación a las Cortes, cuya actuación en este caso es reglada, pues, como ya se ha dicho, en caso de no aprobar el texto en idénticos términos, quedarían disueltas. Dado que el texto aprobado en referéndum se impone a todos los órganos del Estado, aquél se impondrá a las siguientes Cortes.

Estas nuevas modalidades de reforma sustituyen el contenido del epígrafe E) «Las Leyes Fundamentales: su reforma», del tema XXVIII (5.ª U. D., página 112).

c) Introducción de una nueva modalidad de referéndum. El artículo 5.º, mencionado con motivo de la reforma, amplía y explicita la potestad del Jefe del Estado de someter a referéndum opciones políticas de interés general, sean o no constitucionales, aclarando que en caso de ser aprobado el texto propuesto, éste se impone a todos los órganos del Estado. Así pues, esta prerrogativa regia ha de incorporarse a la pregunta B) «El Jefe del Estado, y la función legislativa, tema XXIX, U. D. 5.ª, página 128.

IV. Para una mayor profundización sobre la compleja problemática que plantea la Ley de Reforma Política y aparte de los múltiples comentarios de prensa debidos a muchos de nuestros constitucionalistas, se recomienda la recientísima obra del profesor Lucas Verdú, «La octava Ley Fundamental»: crítica jurídico-política de la reforma actual, Ed. Tecnos, Madrid, 1976.

Derecho del Trabajo

Decreto 160/1976 de 6 de febrero (B.O.E. de 9 de febrero) por el que se crea la Subsecretaría de la Seguridad Social.

Esta disposición modifica, parcialmente, la organización central del Ministerio de Trabajo, afectando al tema XXIX, apartado B) de la Unidad Didáctica 5.^a.

Decreto 619/1976 de 18 de marzo (B.O.E. de 27 de marzo), por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional.

Esta norma ha sido modificada o adecuada a las alzas experimentadas en el coste de la vida, por el *Real Decreto 2325/1976 de 1 de octubre* (B.O.E. de 8 de octubre), en virtud del cual se revisa dicho salario para el período comprendido entre el 1 de octubre de 1976 y 31 de marzo de 1977.

Ambas normas, afectan al tema XIII, apartado E) de la Unidad Didáctica 3.^a.

Real Decreto 2133/1976 de 10 de agosto (B.O.E. del 16 de septiembre), por el que se organizan los Servicios de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ambos modifican, el ya aludido tema XXIX, apartado B) de la Unidad Didáctica 5.^a.

Orden Ministerial de 15 de octubre de 1976 (B.O.E. del 20 de octubre), por la que se aprueban las normas objetivas aplicables a los procesos de despido, como consecuencia de la suspensión del artículo 35 de la L. R. L., por el Decreto-Ley ya aludido sobre medidas económicas, que determina la no aplicación de las normas que sobre el despido establece el Real Decreto de 16 de julio de 1976. Modifica el tema XXVI, H) de la Unidad Didáctica 5.^a.

Nota: En el próximo número de este Boletín se incluirán las modificaciones introducidas por el R.D.L. de 4-3-1977, sobre relaciones de trabajo («B.O.E.» de 9 marzo 1977).

Derecho Canónico

Con fecha 15-IX-1976 (B.O.E., n.º 230) se hace público el acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español, firmado en la Ciudad del Vaticano, el 28-VII-1976, por el Cardenal Villot, Secretario de Estado y el Ministro de Asuntos Exteriores señor Oreja; extendiéndose el Acta de canje de Instrumentos de ratificación el 20-VIII-1976, fecha de entrada en vigor. CON ELLO SE VE AFECTADO EL TEMA XXXV, PUNTOS «B» Y «C», DE LA UNIDAD DIDACTICA/6 DE LA ASIGNATURA DE DERECHO CANONICO.

El acuerdo de 28 de julio de 1976 es «específico», en cuanto, derogando el de 7-VI-1941 y los artículos VII y VIII párrafo 2.º, del vigente Concordato de 1953, revisa el Privilegio de presentación de Arzobispos y Obispos residenciales y de Coadjutores con derecho de sucesión, y, suprimiendo el artículo XVI, pone fin al Privilegio del fuero eclesiástico.

Este nuevo Acuerdo ha sido calificado, también, de «pórtico» por ser el primero en el «iter» de la revisión del Concordato y por analizar las causas que obligan a ella. Pero, además, según las declaraciones de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia, existe un «compromiso» de terminar la revisión en el plazo de dos años, so pena de, a su término, dar por caducado el texto en vigor.

En orden a su contenido, respecto al «fuero eclesiástico», elimina todo privilegio ante las distintas jurisdicciones estatales, salvándose el secreto ministerial del sacerdocio y los casos de competencia exclusiva de los tribunales de la Iglesia. Únicamente, en los emplazamientos de clérigos ante la jurisdicción penal del Estado, la autoridad judicial deberá notificar la actuación al Ordinario del que dependa el requerido y, si se trata de un obispo, a la Santa Sede. La notificación es «post factum».

Por lo que afecta al «nombramiento de Obispos», se reconoce la competencia exclusiva de la Sede Apostólica, y se establece la práctica de la «Prenotificación oficiosa no vinculante» al Gobierno, que podrá exponer ante aquella, en término de 15 días, objeciones concretas de índole política general sobre el designado, a tiempo de ser consideradas prudentemente y decidir o no su preconización definitiva.

Sin embargo, el privilegio de presentación se mantiene, con nueva regulación, para la provisión del Vicariato General Castrense. Para ella se formularán, sucesivamente, ternas elaboradas en común por la Nunciatura y el Ministerio de Asuntos Exteriores, hasta que una sea aprobada por la Santa Sede. De esta terna, el Rey de España presentará un miembro, que será nombrado Obispo por el Romano Pontífice. Igual procedimiento se seguiría para el Obispo de Seo de Urgel, en razón de ser Copríncipe de Andorra, según cláusula no hecha pública.

Régimen de determinadas liquidaciones tributarias

(Esta disposición modifica y amplía el tema XIV, Unidad Didáctica/3, página 35 y siguientes).

El Real Decreto 1920/1976, de 16 de julio (B.O.E. de 14 de agosto), ha introducido determinadas modificaciones en los siguientes puntos:

- a) En los supuestos de autoliquidación tributaria.
- b) En el contenido de las actas previas o definitivas que formalice la inspección.
- c) Determinación de diversos supuestos en los que puede formalizarse acta previa por la Inspección.
- d) Modificación en el régimen de las liquidaciones cautelares.

Este Decreto de 16 de julio de 1976 trata de conseguir un nivel mayor de eficacia en la gestión tributaria. También pretende culminar la simplificación del procedimiento de gestión tributaria iniciada por el Decreto 2137/1965, de 8 de julio; también busca activar la gestión de los tributos.

Impuesto sobre la renta de personas físicas

(Esta disposición amplía el tema XVIII, Unidad Didáctica/3, páginas 140 y siguientes).

Sanciones

El Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre (B.O.E. del 11) ha dispuesto en su artículo 21:

«Se consideran infracciones cometidas en el Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas, además de las que directamente infrinjan la normativa de éste, las realizadas por el propio sujeto pasivo contribuyente en los impuestos a cuenta de

aquél. Además de las sanciones previstas en la normativa vigente, las infracciones cometidas contra el IGRPF se sancionarán:

- a) Las de omisión, con una multa no condonable igual a la deuda tributaria ocultada.
- b) Las de defraudación, con una multa no condonable igual al doble de la deuda tributaria ocultada.

Se sancionará con multa de 50.000 a 250.000 pesetas a las personas físicas que no incluyan en su declaración signos externos que les sean imputados a tenor de lo dispuesto en el artículo 20 del texto refundido del Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas.» (La O.M. de 19 de octubre de 1976 ha graduado la cuantía de esta sanción en función de la trascendencia fiscal del signo externo ocultado, midiéndose ésta por el importe de su valoración.).

Sanciones tributarias

IMPUESTO INDUSTRIAL (Cuota de Beneficios), Impuesto sobre Sociedades, e Impuesto sobre el Tráfico de las Empresas. (Esta disposición amplía el tema XVIII, Unidad Didáctica/3, páginas 140 y siguientes).

Sanciones

El Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre (B.O.E. del 11) ha dispuesto en su artículo 19:

«Los sujetos pasivos que tengan la consideración de reincidentes... si cometieren una infracción consistente en sustancial omisión o falseamiento contables, no podrán durante el plazo de los cinco ejercicios siguientes recibir subvenciones del sector público, ni crédito oficial ni disfrutar de los incentivos tributarios que se indican en este artículo.»

Contribución urbana

Esta disposición modifica y amplía el tema XXI, Unidad Didáctica/4, página 56.

El Real Decreto 2264/1976, de 15 de octubre (B.O.E. del 23) ha reformado el Texto Refundido de la Contribución Urbana quedando redactado nuevamente el artículo 4.º del citado Texto Refundido en la forma siguiente:

«Tendrán la consideración de suelo los terrenos siguientes: Primero. Los urbanos, entendiéndose por tales:

- a) En los municipios en que exista plan general municipal, los que éste incluya como tales por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas, y suministro de energía eléctrica, o por estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, al menos en dos terceras partes de su superficie, en la forma que el plan determine, y los que, en ejecución del plan, lleguen a disponer de los mismos elementos de urbanización.

b) En los municipios que carecieren de plan general municipal, los terrenos que por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, o por estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, al menos en la mitad de la superficie, se incluyen en un proyecto de delimitación aprobado en la forma que legalmente se determina.

Segundo. El terreno urbanizable programado constituido por aquel que deba ser urbanizado, según el programa del propio plan general.

Tercero. El terreno urbanizable no programado desde el momento en que por aprobación de programas de actuación urbanística puede ser objeto de urbanización.

Cuarto. Los que, cualquiera que sea su naturaleza, dispongan de vías que tengan pavimentada la calzada o encintado de aceras y cuenten además con suministro de agua, servicios de desagües y alumbrado público.

Cuando dichas vías no formen manzanas cerradas, se tomará como profundidad de las parcelas afectadas la correspondiente a un fondo normal edificable, de acuerdo con las circunstancias de la localidad.

Quinto. Los fraccionados en contra de lo dispuesto en la legislación agraria.

Sexto. Los ocupados por contribuciones sujetas a esta contribución.

Contribución rústica (Cuota proporcional)

(Esta disposición modifica y amplía lo dispuesto en el tema 25, de la unidad didáctica 5.^a, página 21.)

Amortizaciones

El Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre («B.O.E.» del 11) ha dispuesto en su artículo 18:

«Las empresas que adquieran y reciban, desde la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley hasta el 31 de julio de 1977, maquinaria y bienes de equipo de origen nacional disfrutarán, en relación con los indicados bienes y a efectos del Impuesto sobre Sociedades, Impuesto Industrial, Cuota de beneficios y Cuota proporcional de la Contribución Territorial Rústica, de libertad de amortización sin necesidad de previa autorización.»

Impuesto industrial

Estimación directa y objetiva singular

(Esta disposición modifica lo dispuesto en el tema XXVI, Unidad Didáctica/5, páginas 44 y siguientes.)

El Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre (B.O.E. del 11) ha dispuesto en su artículo 19 que los sujetos pasivos deberán estar sometidos al régimen de estimación directa o estimación objetiva singular en la determinación de su bases imponibles para tener derecho a los incentivos que a continuación se indican:

- a) Previsión para inversiones, salvo la destinada a inversiones y gastos de investigación en explotaciones agrarias.
- b) Reserva de inversiones para la exportación.
- c) Libertad de amortización, amortización acelerada y planes especiales de amortización.
- d) Compensación de pérdidas.
- e) Apoyo fiscal a la inversión.
- f) Beneficios tributarios a la concentración de empresas.
- g) Beneficios tributarios a industrias de interés preferente, polos de desarrollo, polígonos industriales e interés turístico.
- h) Otros incentivos y beneficios tributarios que a estos efectos se especifiquen legalmente.

Sin perjuicios de derechos adquiridos con anterioridad, la norma precedente se aplicará a partir de los ejercicios económicos iniciados el 1 de enero de 1977 o con posterioridad.

Impuesto industrial (Cuota de beneficios)

Esta disposición amplía el tema XXVI, Unidad Didáctica/5, página 47.

Amortizaciones

El Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre (B.O.E. del 11), ha dispuesto en su artículo 18:

«Las empresas que adquieran y reciban, desde la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-Ley hasta el día 31 de julio de 1977, maquinaria y bienes de equipo de origen nacional disfrutarán, en relación con los indicados bienes y a efectos del Impuesto sobre Sociedades, Impuesto Industrial, cuota de beneficios y cuota proporcional de la Contribución Territorial Rústica, de libertad de amortización sin necesidad de previa autorización.»

(Impuesto industrial)

Esta disposición modifica y amplía el tema XXVI, Unidad Didáctica/5, página 51.

Apoyo fiscal a la inversión

El Real Decreto-Ley de 30 de julio de 1976 (B.O.E. de 4 de agosto) ha reimplantado el Apoyo Fiscal a la inversión.

Finalidad. El relanzamiento de la inversión industrial que se estima como requisito básico para la creación de puestos de trabajo y para la atenuación de desequilibrios regionales.

Cuantía. Se puede deducir de la cuota una cantidad igual al diez por ciento de las inversiones que efectivamente realicen.

Quiénes pueden realizar la deducción

Sólo las industrias que se sitúen en zonas de preferente localización industrial, industrial-agraria, polígonos industriales, polos de promoción y desarrollo y áreas de expansión industrial, o a los siguientes sectores: minería, siderurgia, industrias alimentarias y agrarias, armadores de buques y pesqueros.

Materialización de la inversión

En bienes materiales nuevos de activo fijo que tengan relación directa con las actividades e industrias señaladas en el párrafo anterior que se contraten en firme antes del 31-3-1977 y se reciban o construyan antes del 1-1-1981. Los bienes deberán ser de fabricación nacional.

Impuesto sobre la renta de sociedades

Estimación directa y objetiva singular

(Esta disposición modifica el tema XXVII, Unidad Didáctica/5, páginas 68 y siguientes.)

El Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre (B.O.E. del 11) ha dispuesto en su artículo 19 que los sujetos pasivos deberán estar sometidos al régimen de estimación directa o estimación objetiva singular en la determinación de sus bases imponibles para tener derecho a los incentivos que a continuación se indican:

- a) Previsión para inversiones, salvo la destinada a inversiones y de investigación en explotaciones agrarias.
- b) Reserva de inversiones para la exportación.
- c) Libertad de amortización, amortización acelerada y planes especiales de amortización.
- d) Compensación de pérdida.
- e) Apoyo fiscal a la inversión.
- f) Beneficios tributarios a la concentración de empresas.
- g) Beneficios tributarios a industrias de interés preferente, polos de desarrollo, polígonos industriales e interés turístico.

- h) Otros incentivos y beneficios tributarios que a estos efectos se especifiquen legalmente.**

Sin perjuicio de los derechos adquiridos con anterioridad, la norma precedente se aplicará a partir de los ejercicios económicos iniciados el 1 de enero de 1977 o con posterioridad.

Impuesto sobre la renta de sociedades

Esta disposición amplía el tema XXVII, Unidad Didáctica/5, página 70.

Amortizaciones

El Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre (B.O.E. de 11 de octubre), ha dispuesto en su artículo 18.

«Las empresas que adquieran y reciban, desde la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-Ley hasta el día 31 de julio de 1977; maquinaria y bienes de equipo de origen nacional disfrutarán, en relación con los indicados bienes y a efectos del Impuesto sobre Sociedades, Impuesto Industrial, Cuota de Beneficios y cuota proporcional de la Contribución Territorial Rústica, de libertad de amortización sin necesidad de previa autorización.»

Impuesto sobre la renta de sociedades

Esta disposición modifica y amplía el tema XXVII, Unidad Didáctica/5, página 81.

Deuda tributaria

El Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre (B.O.E. del 11) ha dispuesto en su artículo 22 lo siguiente:

«Las sociedades y demás entidades jurídicas sujetas y no exentas al impuesto sobre sociedades estarán sometidas en la cuota de dicho impuesto a un recargo transitorio para el tesoro, que consistirá en el 10 por 100 de la parte de la base liquidable que exceda del 8 por 100 del capital fiscal.

Este recargo solamente se exigirá por los beneficios correspondientes al primer ejercicio que se cierre a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley, salvo que dicho ejercicio sea inferior a doce meses, en cuyo caso se sujetará también el ejercicio siguiente, pero sólo en la parte de beneficio que corresponda proporcionalmente al tiempo que faltare para completar los doce meses.

Impuesto sobre la renta de sociedades

(Esta disposición modifica el tema XXVII de la Unidad Didáctica/5, página 86.)

Fondo de reserva para inversiones de exportación

El Real Decreto-Ley 16/1976, de 24 de agosto, que tiene, entre otras, la finalidad de fomentar nuestras exportaciones, ha introducido las siguientes modificaciones:

1. Ampliar a 4 años el plazo para la aplicación de las asignaciones a este fondo.
2. Se amplía el círculo de disponibilidades de la reserva.
3. Se extiende el régimen de la reserva para inversiones de exportación a todos los sectores y empresas exportadoras de bienes y servicios.
4. Las dotaciones a esta reserva tendrán la consideración de beneficios no distribuidos a efectos de la previsión para inversiones.

Impuesto sobre la renta de sociedades

Esta disposición modifica y amplía el tema XXVII, Unidad Didáctica/5, página 86.

Apoyo Fiscal a la Inversión

(Véase lo dispuesto por el Real Decreto-Ley de 30 de julio de 1976, B.O.E. de 4 de agosto, que es aplicable a este impuesto y que se ha transcrito en el tema del Impuesto Industrial).

Impuesto general sobre la renta de las personas físicas

Esta disposición modifica el tema XXVIII, Unidad Didáctica/5, apartado 1): páginas 116-117; apartado 2): página 119.

El Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre (B.O.E. del 11), ha introducido las siguientes modificaciones en el impuesto:

1. Elevación de tipos de gravamen de la vigente tarifa correspondientes a los tramos de base liquidable superior a un millón de pesetas en un 10 por 100 de los mismos. En ningún caso la cuota íntegra resultante por aplicación de los tipos de gravamen de la tarifa, con las modificaciones señaladas en el párrafo anterior, podrán exceder del 44 por 100 de la base liquidable.

(La Orden ministerial de 19 de octubre de 1976, B.O.E. del 20, ha publicado la tarifa que refunde en sus tipos este incremento.)

2. De la cuota del Impuesto General no se deducirán las cuotas de los impuestos a cuenta exentas, desgravadas, bonificadas o que correspondan a reducciones de la base imponible, excepto las correspondientes a los límites exentos del Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal e Impuestos sobre Actividades y Beneficios Comerciales e Industriales, cuota por Beneficios, incluidas las reducciones correspondientes a los titulares de familia numerosa. La Orden Ministerial de 19 de octubre de 1976 (B.O.E. del 20) ha dispuesto que no es aplicable lo preceptuado en esta norma a las denominadas por la doctrina «exenciones técnicas» para evitar la doble imposición interna, concretamente, las que se refieren a los dividendos y participaciones en beneficios, distribuidos por las Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria, respectivamente, con lo cual se respeta la transparencia fiscal que justifica tales exenciones.

Asimismo, de la cuota del Impuesto General, se deducirán las cuotas proporcionales de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria y del Impuesto sobre Actividades y Beneficios Comerciales e Industriales correspondientes a las cantidades destinadas a inversiones o gastos de investigación en las explotaciones agrarias para mejora de su productividad y las destinadas al Fondo de Previsión para Inversiones, y a la Reserva para Inversiones de Exportación, respectivamente.

Las modificaciones de los dos números anteriores se aplicarán a las rentas obtenidas en los ejercicios de 1976 y 1977.

Impuesto sobre la renta de personas físicas

Suspensión del gravamen de las plusvalías

Esta disposición modifica el tema XXVIII, Unidad Didáctica/5, páginas 120 y siguientes, y en lo referente a las primas por seguros de vida modifica lo contenido al respecto en la página 110.

Valores Mobiliarios

El Real Decreto-Ley, de 10 de agosto de 1976 (B.O.E. del 13) dispone la suspensión del gravamen de las plusvalías de los valores mobiliarios dentro del Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas en los siguientes términos: «Se suspende durante los ejercicios 1976, 1977 y 1978, la aplicación de lo previsto en las normas contenidas en el apartado dos del artículo dieciséis del Texto Refundido de la Ley del Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas, en el artículo dieciséis del Decreto-Ley doce/mil novecientos setenta y tres, de treinta de noviembre, en los artículos diez y once del Decreto-Ley 2/1976, de 7 de abril, y en las demás disposiciones concordantes, en la parte relativa a las enajenaciones de valores mobiliarios.»

Activos mobiliarios que no sean valores mobiliarios y activos inmobiliarios

Desgravación por reinversión

El mismo Decreto-Ley dispone: «En los mismos ejercicios señalados en el apartado anterior no se sujetarán a gravamen en el citado Impuesto General (se refiere al General sobre Personas Físicas) las plusvalías obtenidas en la enajenación de activos mobiliarios no comprendidos en el apartado anterior, e inmobiliarios, cualquiera que sea el plazo que medie entre la adquisición y la enajenación, siempre que el producto de la operación se reinvierta en valores mobiliarios de los que expresamente señale el Ministerio de Hacienda». Esta determinación ha sido hecha por la Orden Ministerial de 13-VIII-1976 (B.O.E. 20-8-1976).

Desgravación por inversiones

El mismo Decreto-Ley (10 agosto 1976) dispone que «se prorroga hasta el 31-12-1978 el régimen de desgravación por inversiones previsto en el apartado anterior; no obstante, se elevarán al doble para aquellas inversiones que se realicen a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley hasta el 31-12-1978, en la suscripción de valores mobiliarios emitidos por sociedades cuyos títulos se coticen en Bolsa y que respectivamente se determinen por el Ministerio de Hacienda». Esta determinación ha sido hecha por la Orden Ministerial de 13-8-1976 (B.O.E. 20-8-1976).

Primas por seguro de vida

Se eleva a trescientas mil pesetas el límite de doscientas mil, previsto en la letra h) del apartado uno del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas.

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

Esta disposición modifica el tema XXXI. Unidad Didáctica/6, páginas 25 y siguientes.

El Real Decreto-Ley 16/1976, de 24 de agosto (B.O.E. del 25) ha introducido determinadas modificaciones que se inspiran en el deseo de reducir el déficit presupuestario y conseguir determinados objetivos de la política económica del Gobierno:

1 Se aumenta en un diez por ciento los tipos y gravámenes aplicables en el Impuesto General sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

El Real Decreto 1981/1976, de 24 de agosto (B.O.E. del 25) ha fijado los nuevos tipos y gravámenes de la Tarifa del Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos documentados. Estos tipos fueron aumentados en un diez por ciento (con autorización de redondeo) por Real Decreto-Ley de esta misma fecha, como ya hemos indicado.

Impuestos especiales

Esta disposición modifica el tema XXXIII, Unidad Didáctica/6, páginas 81-82.

El Real Decreto-Ley 16/1976, de 24 de agosto (B.O.E. del 25) ha introducido determinadas modificaciones que se inspiran en el deseo de reducir el déficit presupuestario y conseguir determinados objetivos de la política económica del Gobierno:

1. El tipo que grava las gasolinas en general, con excepción de la supercarburante, comprendidas en el epígrafe uno, de la tarifa primera, del Impuesto sobre el Petróleo y sus derivados, será de siete cincuenta pesetas litro.

Impuesto sobre el lujo

El Real Decreto-Ley 16/1976, de 24 de agosto (B.O.E. del 25), ha introducido determinadas modificaciones que se inspiran en el deseo de reducir el déficit presupuestario y conseguir determinados objetivos de la política económica del Gobierno.

1. Se incrementa el tipo que grava la adquisición de gasolina supercarburante en dos pesetas por litro.

2. Se establece un recargo transitorio del 10 por 100 sobre los tipos actualmente exigidos en el Impuesto sobre el Lujo, con excepción de los que gravan la tenencia y disfrute de automóviles y la Patente Nacional de Automóviles vigente en Ceuta y Melilla y de los productos comprendidos en el artículo 15 del Texto Refundido de impuestos sobre el Lujo.

La Orden Ministerial de 25 de agosto de 1976 (B.O.E. del 2 de septiembre) ha aprobado las nuevas tarifas de tipos de gravamen del impuesto que recogen el recargo transitorio del 10 por 100 establecido por el Real Decreto-Ley 16/1976, de 24 de agosto antes citado.

Tasas y tributos parafiscales

Esta disposición amplía el tema 35, Unidad Didáctica/6, páginas 129 y siguientes.

El Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre (B.O.E. del 11) contiene la siguiente delegación:

Artículo 17 «El Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, procederá por Real Decreto-Ley, por una sola vez y antes del 31 de marzo de 1977, a la revisión de las tasas y tributos parafiscales en vigor, cualquiera que sea su origen, determinando las que deban suprimirse o refundirse y pudiendo elevar hasta un máximo del 50 por 100 de su actual importe las de cuantía fija que no hayan sufrido alteración con posterioridad al 1 de enero de 1971.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a las tasas de Correos y Telecomunicaciones. Las tasas académicas continuarán reguladas por su legislación específica.

El Gobierno podrá establecer tarifas bonificadas en función de la incidencia social de la exacción».